



La **Fuerza** de México

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PARTIDARIOS DEL MILITANTE.

ACTOR: RUBÈN ERIK ALEJANDRO JIMÈNEZ HERNÀNDEZ.

RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL CONSEJO POLÍTICO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

EXPEDIENTE: CNJP-JDP-DF-173/2012.

México, Distrito Federal, a 23 de abril de 2012.

Asunto: Se notifica Resolución emitida por esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

**LIC. CARLOS CHAUDON ACEVES.
DELEGADO ESPECIAL EN FUNCIONES DE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PRI
EN EL DISTRITO FEDERAL.
PRESENTE.**

Con fundamento en el artículo 34 y 41 del Reglamento de Medios de Impugnación, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución dictada por esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria, con fecha diecinueve de abril de dos mil doce, le **Notifico por oficio** la citada Resolución, Doy fe. -----

Atentamente

“Justicia y Democracia Social”

Juan Carlos Camacho García.

Secretario General de Acuerdos encargado.



25-Abril-2012
13:27hrs



**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS PARTIDARIOS DEL MILITANTE.**

EXPEDIENTE: CNJP-JDP-DF-173/2012

**ACTOR: RUBÉN ERIK ALEJANDRO JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ.**

**AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL Y COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE
DEL CONSEJO POLÍTICO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL
DISTRITO FEDERAL.**

México, Distrito Federal, a diecinueve de abril de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente identificado con la clave **CNJP-JDP-DF-173/2012**, formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante, presentado por el ciudadano **RUBÉN ERIK ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ** quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional, quien se inconforma de: a) El Acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional por el que autorizó al Delegado Especial del CEN en funciones de Presidente del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, a suscribir Convenios de Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México, en la elección de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales en el Distrito Federal, de nueve de marzo de de mil doce; y b) El



Acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, por el que aprobó postular en Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México las Candidaturas a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los candidatos a Jefes Delegacionales y las fórmulas de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa de nueve de marzo de dos doce; y

RESULTANDO:

Del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa se desprenden los antecedentes siguientes:

1. Que el día 1 de julio de 2012 se realizarán elecciones constitucionales en el Distrito Federal para renovar Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Jefes Delegacionales de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
2. Con fecha nueve de marzo de dos mil doce, el Comité Ejecutivo Nacional emitió acuerdo por el que autorizó al Delegado Especial del CEN en funciones de Presidente del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, a suscribir Convenios de Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México, en las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.



3. Con fecha nueve de marzo de dos mil doce, la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, emitió Acuerdo por el que se aprueba postular en Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México, las Candidaturas a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los candidatos a Jefes Delegacionales y las fórmulas de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa.
4. Inconforme con la emisión de los acuerdos citados, la parte actora promovió el medio impugnativo citado al rubro el catorce de marzo de dos mil doce.
5. El veintiocho de marzo dos mil doce, se recibió en esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria, las constancias que integran el expediente del medio impugnativo, remitidas por el Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal.
6. El veintinueve de marzo de dos mil doce, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, acordó entre otras cuestiones la **RADICACIÓN** del presente medio de impugnación identificándolo con la clave alfanumérica al rubro citado.
7. El diecisiete de abril dos mil doce, la Secretaría General de Acuerdos, dictó auto de **ADMISIÓN** del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante planteado, y declaró cerrada la instrucción del mismo, turnándolo a la Sub Comisión de lo Contencioso del Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y por tanto, procedió a dejar el presente asunto en estado de resolución, misma que se pronuncia al tenor de los siguientes;



CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, es competente para conocer y resolver sobre el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, de conformidad con lo establecido por los artículos 209, 211, 214, fracciones I y XII y 215 de los Estatutos vigentes del Partido Revolucionario Institucional; 27 fracciones I, II y X del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria ; 5 fracción IV, 54, 55 Párrafo Segundo, 79 y 80 del Reglamento de Medios de Impugnación; toda vez que se trata de un escrito que contiene el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, interpuesto por la parte actora, en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de: a) El Acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional por el que autorizó al Delegado Especial del CEN en funciones de Presidente del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, a suscribir Convenios de Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México, en la elección de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales en el Distrito Federal, de nueve de marzo de de mil doce; y b) El Acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, por el que aprobó postular en Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México las Candidaturas a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los candidatos a Jefes Delegacionales y las fórmulas de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa de nueve de marzo de dos doce.



Cabe hacer aquí mención que si bien es cierto que, en principio, le correspondería conocer del juicio que ahora se resuelve a la Comisión de Justicia Partidaria en el Distrito Federal; habida cuenta que el medio de impugnación intentado deriva de un conflicto del ámbito local y que el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante se resuelve por las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, en única instancia, atendiendo al ámbito de competencia de cada una de éstas; no menos cierto lo es que; al no encontrarse, a la fecha, conformada la Comisión de Justicia Partidaria en el Distrito Federal, este órgano de dirección al resolver el expediente identificado con la clave CNJP-RA-DF-008/2009 el veintiséis de enero de dos mil nueve, determinó; en lo que interesa, lo siguiente:

“Por ello, esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria, al encontrar indebidamente integrada a la Comisión de Justicia Partidaria del Distrito Federal y que ésta no ejerce con eficacia sus atribuciones conferidas en materia de impartición de justicia intrapartidaria, estima oportuno ordenar al Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Distrito Federal, así como al Secretario Técnico del Consejo Político del Distrito Federal, informen a esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria, dentro del término de tres días, los nombres de los siete integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria del Distrito Federal propuestos por el Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Distrito Federal, y electos en la sesión plenaria del Consejo Político del Distrito Federal de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho, tal y como lo previenen los artículos 119, fracción XXX, y 212 de los Estatutos que rige la vida interna del Partido.”

- “Por lo anterior, hasta en tanto la Comisión de Justicia Partidaria del Distrito Federal se encuentre debidamente integrada, a fin de ejercer a cabalidad sus atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la vida interna del Partido, esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria conocerá, substanciará y resolverá los medios de impugnación intrapartidarios que se presentaren con motivo de procesos internos de postulación de candidatos o elección de dirigentes, así como los que deriven de actos emitidos por órganos de nuestro instituto político, y cuyo competencia originaria



corresponda a la Comisión de Justicia Partidaria del Distrito Federal."

*el resaltado es propio

Por tanto, lo procedente es conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante presentado por el promovente, con plenitud de jurisdicción.

SEGUNDO. Procedibilidad. Previo al estudio de los agravios del presente asunto, este órgano de dirección procede a realizar el análisis de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación, así como las causas de improcedencia que en la especie pudieran actualizarse, contenidas en el artículo 23 del Reglamento de Medios de Impugnación, pues su examen resulta de oficio y preferente por tratarse de una cuestión de orden público tal como lo establece la tesis de jurisprudencia identificada con la clave **S3LA 01/97** sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: **"ACCIONES SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO"**.

En este orden de ideas, cabe hacer mención que las causales de improcedencia y sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, a fin de no vulnerar con ello, el derecho de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 Constitucional; esto es, deben advertirse en forma clara, ya sea del escrito de demanda, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás constancias que obren en autos, de tal forma que, sin entrar al examen de los agravios expresados por la parte actora y las demás pretensiones de las partes, no hay duda en cuanto a su existencia.



Sentado lo anterior, cabe señalar que la instancia partidista señalada como responsable al rendir su informe circunstanciado, no hizo valer alguna causal de improcedencia, ni este órgano de dirección advierte la actualización de éstas.

En el caso, cabe hacer mención en cuanto a los requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad, lo siguiente:

1. Oportunidad. El juicio para la protección de los derechos partidarios del militante fue promovido dentro del plazo de cuatro días, previsto en el numeral 16, párrafo segundo del Reglamento de Medios de Impugnación, habida cuenta que el documento que ahora constituye el acto reclamado, fue emitido el nueve de marzo de dos mil doce, y dado a conocer al día siguiente, en tanto que el escrito impugnativo se presentó el catorce de marzo del mismo año.

2. Personería. La personería de la parte actora, se encuentra acreditada en términos de la constancia de militancia expedida por la Secretaría de Organización de este Partido.

3. Legitimación. El medio de impugnación fue promovido por parte legítima, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Medios de Impugnación, corresponde instaurarlo a los militantes del partido que impugnen los actos que estimen les causó agravio personal y directo.

4. Formalidad. El escrito de demanda reúne los requisitos formales que establece el artículo 18 del ordenamiento reglamentario invocado, porque hace constar el nombre del actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los



hechos en que se sustenta la impugnación, así como los agravios que el acto combatido le causan a quien promueve, además de hacer constar el nombre y firma autógrafa de quien interviene.

Sentado lo anterior, procede el examen de fondo del presente asunto.

TERCERO. Precisión de los agravios hechos valer por la actora. Para estar en aptitud de conocer lo que expresa el recurrente en los agravios del escrito de impugnación, se procede a efectuar un análisis integral de los mismos a fin de desprender la verdadera intención respecto del perjuicio que en su decir le ocasiona el acto o resolución reclamada, con independencia de que los motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo distinto de aquél que dispuso para tal efecto el interesado.

Lo anterior, para que esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria garantice la observancia de los principios de exhaustividad y congruencia que está obligada a acatar, Resultan aplicables al caso las tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicadas bajo los rubros, **“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”** y **“AGRAVIOS PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”**

Con base en lo anterior, el inconforme aduce como agravios los siguientes:

A. Que el Convenio viola disposiciones constitucionales y estatutarias al carecer de la debida fundamentación y motivación legal, ya que, en su opinión, el Comité Directivo



del Distrito Federal, omitió solicitar autorización del Comité Ejecutivo Nacional para formar coalición ante la Comisión Política Permanente, no así el Consejo Político del Distrito Federal, además de que no escuchó opiniones de los consejos políticos delegacionales que se pronunciaron en su oportunidad. Siendo que en términos del artículo 64 de los Estatutos del Partido, la Comisión Política Permanente no es un órgano de dirección.

B. Que el Convenio de coalición viola su garantía partidaria, debido a que el cargo de elección popular al que aspira fue concedido al Partido Verde Ecologista de México, negándole a participar en el proceso interno.

C. Que se violan sus derechos partidarios de hacer carrera de partido, y participar en un proceso interno para postular candidatos a cargos de elección popular.

D. Que la decisión de la Comisión Política Permanente violó su derecho a ser votado previsto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como militantes de participar en los procesos electivos internos para ser postulado candidato por el partido.

En este orden de ideas lo procedente es que este órgano de dirección del Partido Revolucionario Institucional, se avoque al estudio de fondo de la litis planteada por el enjuiciante, por no ser contrario a derecho, lo cual se aborda de la siguiente manera:

CUARTO. Estudio de fondo. Por cuestión de método, este Órgano Colegiado analizará conjuntamente los agravios identificados con las letras **A, B, C y D**, dada la estrecha relación que existe entre los mismos.



En este contexto, no se omite señalar que el estudio de los conceptos de violación en la forma que se ha mencionado no le causa perjuicio alguno al ciudadano enjuiciante, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, siendo lo trascendental que éstos sean estudiados.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificado con la clave S3ELJ 04/2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.- Partido Revolucionario Institucional.-29 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.- Partido Revolucionario Institucional.-11 de enero de 1999.- Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.- Partido Revolucionario Institucional.- 9 de septiembre de 2000.- Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 5-6, Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2000.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 13-14.”



Sentado lo anterior, cabe señalar que son **INFUNDADOS** los agravios identificados con las letras **A, B, C y D** por los siguientes razonamientos lógico-jurídicos:

De conformidad con el artículo 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f), *in fine* de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos con registro nacional, en el ámbito local, deberán ajustar su actuar a las disposiciones normativas que, en este caso, rigen en el Distrito Federal.

Dicha previsión se reitera tanto en el numeral 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como en el artículo 4° del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los Partidos Políticos en los términos que expresamente señale la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el referido Código.

Ahora bien, como quedó apuntado, los partidos políticos nacionales, únicos entes facultados para participar, tanto en las elecciones locales y en forma permanente, en los asuntos políticos del Distrito Federal, quedan vinculados en el desarrollo de sus actividades político-electorales, a lo dispuesto por las disposiciones aplicables en el ámbito de esta entidad federativa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación en la tesis relevante identificada con la clave S3EL 037/99, cuyo rubro es "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU ACTUACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES ELECTORALES DE LOS ESTADOS, CUANDO ACTÚAN EN EL ÁMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES."



En ese sentido, conviene destacar el contenido de los artículos 1, fracciones I y II, 4º, 187, fracción III, 188 y 222, fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010, que en su parte conducente establecen:

“Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el Distrito Federal.

Este ordenamiento reglamenta las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal relativas a:

- I. Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Distrito Federal;
- II. Las prerrogativas y obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales y Locales;

...”

“Artículo 4. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los Partidos Políticos en los términos que expresamente señale la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el presente Código.”

“Artículo 187. Para los efectos de este Código la denominación Asociación Política se refiere al conjunto de ciudadanos que en los términos del artículo 9 de la Constitución Política, se reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Se reconocen como Asociaciones Políticas las siguientes:

...

- III. Partidos Políticos Nacionales.”

“Artículo 188. Los Partidos Políticos constituyen entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de los derechos y de las prerrogativas que para cada caso se establecen en la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno y este Código, y quedarán sujetas a las obligaciones que prevén estos mismos ordenamientos.”



“Artículo 222. Son obligaciones de los Partidos Políticos:

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de sus ciudadanos;

...”.

De los anteriores preceptos, destaca por su importancia, para el caso que nos ocupa, la fracción I del artículo 222 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que establece como obligaciones de los partidos políticos nacionales cuando actúan en el Distrito Federal, conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetar la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos.

Ahora bien, la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional se conforma, entre otros documentos básicos, por los estatutos aprobados y registrados ante el Instituto Federal Electoral, que son los mismos que operan para el ámbito del Distrito Federal, pues como ya se dijo con anterioridad, en esta entidad federativa pueden participar los partidos políticos que ostenten dicho registro a nivel nacional.

Así se desprende de los artículos 24, párrafo 1, inciso a) y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señalan a la letra:

“Artículo 24



1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Formulan una declaración de principios y, en congruencia, con ellos, su programa de acción y **los estatutos que normen sus actividades**; y

...”

“Artículo 27

Los **estatutos** establecerán:

a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen, y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. Una asamblea nacional o equivalente;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido; y

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas.



campaña electoral; así como, las sanciones aplicables a los miembros por infracción a sus disposiciones internas y los correspondientes medios de defensa.

Sentado lo anterior, dada la naturaleza de la controversia planteada, conviene hacer referencia a diversas disposiciones contenidas en los Estatutos de este Instituto Político Nacional, como son las siguientes:

“Artículo 7. El Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes con partidos políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las constituciones políticas de los estados de la Federación, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades federativas el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal correspondiente solicitará el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. En todo lo anterior, el PRI garantizará la equidad de género en cumplimiento pleno a lo ordenado en los artículos 167 y 168 de estos Estatutos.”

Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal se observará lo siguiente:

I. Tratándose de elecciones de Gobernador o Jefe de Gobierno, Diputado Local por el principio de mayoría relativa, Ayuntamiento, Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa y Jefe Delegacional en el Distrito Federal, el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará;

IV. Para todas las coaliciones, alianzas o candidaturas comunes, concertadas para cargos de elección popular en las entidades federativas, cada Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal actuará de acuerdo con los plazos y procedimientos que determine la ley electoral que corresponda.

Artículo 85. El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:



Artículo 196. En los casos en que el Partido suscriba acuerdos de participación, coalición o candidaturas comunes, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de estos Estatutos

Cabe hacer referencia, también, al artículo 68 del Reglamento del Consejo Político Nacional mismo que establece, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 68- Son Atribuciones de los Consejos Políticos estatales y del distrito federal:

XXVI.- Autorizar coaliciones, las alianzas electorales y **candidaturas comunes** locales, previo acuerdo del comité directivo con el comité Ejecutivo Nacional;

A su vez, el artículo 69 del mismo ordenamiento señala lo siguiente:

Art. 69.- Los consejos políticos estatales y del Distrito Federal funcionarán en pleno o en comisiones, en sesiones públicas o privadas, en las fechas y con el orden del día que se establezca en la convocatoria.

De la transcripción de los artículos a los que se ha hecho referencia se advierte que:

1. Las atribuciones de este Partido para constituir coaliciones y postular **candidaturas comunes** con otros partidos políticos, con apego a la Constitución Federal y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, previa solicitud que haga el Presidente del Comité Directivo del Distrito Federal del acuerdo correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional.

2. Para postular candidaturas comunes con otros partidos políticos, deben ser aprobadas por el Consejo Político del Distrito Federal, cuando se trate de elecciones de



Jefe de Gobierno, Diputado a la Asamblea Legislativa por el Principio de mayoría relativa y Jefe Delegacional, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional.

3. El Comité Ejecutivo Nacional cuenta con atribuciones de ser el representante nacional del partido, supervisa y autoriza decisiones de las demás instancias partidistas.

4. El Consejo Político del Distrito Federal cuenta con atribuciones de aprobar la propuesta para suscribir coaliciones y postular candidaturas comunes, haciéndolo por conducto del Presidente del Comité Directivo del Distrito Federal previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.

5.- El Consejo Político del Distrito Federal, como órgano de dirección del Partido, puede funcionar y tomar decisiones en pleno o en comisiones.

6.- La Comisión Política Permanente del Consejo Político del Distrito Federal es el órgano facultado por los propios Estatutos del Partido para ejercer las atribuciones del Consejo Político del Distrito Federal en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, quien dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado.

En la especie, de las constancias que obran en el sumario, en especial, de los acuerdos que ahora se tildan de ilegal, a los que este órgano de dirección les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo que establecen los artículos 29 y 33 del Reglamento de Medios de Impugnación, límpidamente se advierte que, contrario a lo que manifiesta



el promovente, sí se encuentran debidamente fundados y motivados y fueron expedidos por las autoridades partidistas competentes, quienes gozan de las atribuciones estatutarias que las facultan para expresamente para ello. Lo anterior es así por lo siguiente:

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece categóricamente lo siguiente:

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad jurídica que se contienen en este: a) la garantía de irretroactividad de la ley; b) la garantía de audiencia, c) la garantía de exacta aplicación de la ley y, por último, d) la garantía de legalidad en materia civil y administrativa. Ahora bien, por cuestión de método, conviene primeramente, delimitar y puntualizar que se entiende por cada una de estas garantías de seguridad. Para el caso que nos ocupa, cabe hacer mención a la garantía de audiencia.



Esta garantía, implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a actos del poder público que tengan por objeto privarlo de sus derechos más elementales y de sus intereses más preciados.

Como se puede advertir, la garantía de audiencia está contenida en una fórmula de cuatro garantías específicas de seguridad jurídica y que son: a) la de que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio; b) que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio.

Por tanto, esta garantía se actualiza cuando la autoridad emite un acto de privación que consiste en una merma o menoscabo de la esfera jurídica del gobernado, así como el impedimento para ejercer un derecho.

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:

“**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...”

En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo constitucional contiene lo que se denomina como “garantía de legalidad”, que condiciona todo acto de molestia en la expresión, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Esto es, que ambas condiciones de validez constitucional del acto de



molestia, deben concurrir necesariamente en el caso concreto, para que aquél no implique una violación a la mencionada garantía.

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las referidas vertientes, consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por otra, invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta en su emisión, para que los motivos aducidos y las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el propósito de que los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la autoridad respectiva.

Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos.



Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.

Amparo directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera S.N.C. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.

Amparo directo 495/91. Finanzas Monterrey S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.

Amparo directo 493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortega Garza.

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Número 54, junio de 1992. p. 49)."

En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya indicados tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas o jurisdiccionales, o de un Partido Político, en tanto entidad de interés público, como es el caso de las responsables, a través de sus titulares, a emitir sus resoluciones en los términos ya precisados, con el objeto de no vulnerar en perjuicio del gobernado o del militante, según el caso, tal garantía individual prevista en la Carta Magna, razón por la cual, las determinaciones que lleven a cabo, como es en la especie, el emitir los acuerdos combatidos, tuvo que cumplir con lo establecido en la garantía de legalidad.

En la especie, de los acuerdos que ahora constituyen el acto reclamado claramente se advierte que la autoridad señalada como responsable sí consideró las



circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión de los actos, al determinar lo siguiente:

Acuerdo 1.

México, D.F. a 9 de marzo de 2012

"LIC. CARLOS CHAUDON ACEVES
DELEGADO ESPECIAL DEL CEN EN FUNCIONES
DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PRI
EN EL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE:

En respuesta a su solicitud para suscribir Convenios de Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México a efecto de competir bajo dicha figura en el proceso Electoral local Constitucional 2012 en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 7, 9 fracción I y IV, 85, fracción II, 119, fracción XXV, y 196 de los Estatutos que rigen la vida interna del Partido Revolucionario Institucional; en relación 68, fracción XXVI, del Reglamento del Consejo Político Nacional, se expide el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. *El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional autoriza al Delegado Especial del CEN en funciones de Presidente del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, a suscribir Convenios de Candidatura Común con el Partido Verde Ecologista de México a efecto de competir bajo dicha figura jurídica en el Proceso Electoral local Constitucional 2012 en el que se elegirá Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales, en los términos que establecen el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, los Estatutos y el Acuerdo de la Comisión Política Permanente del consejo Político del PRI en el Distrito Federal de 9 de marzo de 2012 por el que se aprueba la suscripción de dichos convenios.*

Deberá usted informar oportunamente a este Comité Ejecutivo Nacional sobre los trámites que realice, así como de las resoluciones que emitan las autoridades electorales competentes".

ATENTAMENTE
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL



De lo anterior, válidamente podemos afirmar, en cuanto al primer acuerdo que se tilda de ilegal, que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, cuenta con facultades para acordar la celebración del convenio impugnado, ya que de su contenido, claramente se desprende que fue con motivo de la solicitud hecha por el licenciado Carlos Chaudón Aceves, Delegado Especial del CEN en funciones de Presidente del Comité Directivo del Partido en el Distrito Federal que se autorizó la celebración del **convenio de candidatura común** con el partido Verde Ecologista de México-

En efecto, de la documental que ahora constituye el acto reclamado, diáfananamente se advierte que en el punto único de acuerdo, el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su Presidente autorizó al Delegado Especial del CEN en funciones de Presidente del Comité Directivo del Partido en el Distrito Federal, a **suscribir convenios de candidatura común** con el partido Verde Ecologista de México, para competir bajo dicha figura jurídica en el Proceso Electoral local Constitucional 2012, en el que se elegirá Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales, así como informar al Comité Ejecutivo Nacional sobre los tramites efectuados y resoluciones que emitan las autoridades electorales competentes, de ahí que el acuerdo impugnado fue emitido por la autoridad partidista competente, con apego a la legalidad y se encuentra debidamente fundado y motivado.

De igual forma, de la parte considerativa del acuerdo identificado con el número 2, se desprende que la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Partido en el Distrito Federal, cuenta con facultades para celebrar acuerdos como el que nos ocupa y que con la emisión del acto se apegó al marco estatutario y reglamentario del Partido



Revolucionario Institucional, por lo cual no existe conculcación del principio de legalidad, como lo aduce el impetrante, toda vez que la conducta de la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Distrito Federal se realizó teniendo como base las facultades consagradas en los Estatutos del Partido; en consecuencia, el Acuerdo impugnado fue expedido por la autoridad partidista competente, quien goza de las atribuciones estatutarias que le permiten expedirlo, por lo que se encuentra debidamente fundado y motivado como se desprende del texto del mismo; de ahí que la manifestación hecha en este sentido devenga infundada.

Ahora bien, en cuanto a la afirmación del promovente, en el sentido de que la Comisión Política Permanente no es un órgano de dirección, de conformidad con lo que establece el artículo 64 de los Estatutos del Partido, cabe señalar lo siguiente:

Los numerales 64, fracción VII, 110, fracción I y 115, fracción I de los Estatutos de este Partido prevén lo siguiente:

Artículo 64. Los órganos de dirección del partido son:

...

VII. Los consejos políticos Estatales, municipales y delegacionales;...

Artículo 108. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal son órganos de integración democrática, deliberativos, de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinados a sus respectivas asambleas, en los que las fuerzas más significativas del Partido en la entidad serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los presentes Estatutos y del reglamento nacional que los rija.

Artículo 109. Los Consejos Políticos Estatales y el del Distrito Federal se integrarán con el número de militantes que determine el reglamento nacional, electos democráticamente, respetando el principio de paridad de género y la incorporación de por lo menos la tercera parte de jóvenes.



Artículo 110. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal estarán integrados por:

I. El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, quienes serán el Presidente y el Secretario del Consejo Político respectivo;

Artículo 112. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal funcionarán en pleno o en comisiones y en sesiones públicas o privadas, en las fechas y con la orden del día que se establezcan en la convocatoria. Las sesiones ordinarias del pleno se realizarán cada seis meses y las extraordinarias cuando sean convocadas por su directiva.

Artículo 113. Para sesionar en pleno se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes entre los cuales deberá estar su Presidente y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, aplicándose este mismo precepto para las sesiones en comisiones.

Artículo 114. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal integrarán, con sus consejeros, las comisiones siguientes:

I. La Comisión Política Permanente;

.....

Artículo 115 Las comisiones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal se integrarán:

I. La Comisión Política Permanente: Por un Presidente y un Secretario que será el Presidente y el Secretario en funciones del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como por los vocales que apruebe el pleno;

De los artículos señalados con anterioridad se advierte que:

1. Los órganos de dirección del partido son, entre otros, los consejos políticos Estatales y del Distrito Federal, municipales y delegacionales. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal estarán integrados con el número de militantes que determine el reglamento nacional, electos democráticamente, respetando el principio de paridad de género y la incorporación de por lo menos la tercera parte de jóvenes,



entre los que se deben de incluir el Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal.

2.- Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal funcionarán en pleno o en Comisiones; para sesionar tanto en pleno como en comisiones se requerirá la asistencia de la mayoría de los integrantes en cada caso, entre los cuales deberá estar su Presidente y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos de los consejeros presentes.

3.- Entre otras, los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal integrarán con sus consejeros una Comisión Política Permanente, de la cual formarán parte el Presidente y el Secretario en funciones del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como por los vocales que apruebe el pleno, y cuya función será ejercer las atribuciones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, debiendo de dar cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado.

De las disposiciones estatutarias descritas, válidamente podemos afirmar que la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Distrito Federal es la Comisión competente de dicho órgano de dirección de este Partido en esta Entidad Federativa, facultada de manera precisa y expresa por los Estatutos para ejercer las atribuciones del propio Consejo Político Estatal y del Distrito Federal en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, debiendo de dar cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado.



actor no se le ha prohibido ni limitado su participación en cualesquiera otras tareas que lleva a cabo el Partido Revolucionario Institucional, como tampoco se le ha conculcado su derecho a ocupar y desempeñarse en algún cargo de dirigencia partidista ni tampoco se le ha impedido su desarrollo político.

En cuanto a la vulneración de su derecho a contender a **puestos de elección popular**, que aduce el actor le fue violado, se advierte que no le asiste la razón al justiciable, ya que no acredita con prueba idónea haber realizado trámite alguno relacionado para contender por la candidatura del Partido a algún puesto de elección popular en el Distrito Federal, ya que si bien es cierto, el actor en su demanda la promueve como militante y "aspirante" a participar en el proceso interno para postulación de candidatos a Diputado local en el Distrito XIII en el Distrito Federal, dicha afirmación resulta insuficiente para acreditar los extremos del derecho supuestamente conculcado, por lo cual su agravio resulta **infundado**.

"Por lo que se refiere al agravio identificado con la letra **D**, en el cual el actor refiere que la Comisión Política Permanente violó su derecho a ser votado previsto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como militante de participar en los procesos electivos internos para ser postulado candidato por el partido, cabe señalar lo siguiente:

El artículo 35 de la Constitución General de la República literalmente establece, en lo que interesa, que:

Artículo 35- Son prerrogativas del ciudadano:

...





II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

Del numeral y fracción que antecede se desprende claramente el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos como prerrogativa de poder contender a los cargos de elección popular, siempre y cuando el ciudadano pertenezca a un partido político para que en su calidad de militante, pueda contender por un cargo de elección popular, cumpliendo con los trámites inherentes y requisitos establecidos para la contienda.

En el caso en estudio, de las constancias que integran el expediente en que se actúa no se desprende dato alguno que acredite que el actor haya participado en algún proceso interno para postular candidatos a un cargo de elección popular en el Distrito Federal o que se le hubiere excluido sin existir causa legal alguna, concretándose a señalar el recurrente en su demanda que es “aspirante a participar en el proceso interno para la postulación de candidatos a Diputado local por el Distrito Electoral XIII en el Distrito Federal, sin acreditar esta circunstancia.”

Razón por la cual se advierte que no se violó la prerrogativa constitucional señalada de ser votado a cargos de elección popular, por lo que se considera que dicho agravio es **infundado**.

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se;

RESUELVE:



COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
Carretera México-Toluca, s/n
C. P. 70500, México, D. F.
Tel. 52 55 57 00 00



PRIMERO. Resulta **INFUNDADO** el Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante, promovido por el ciudadano **RUBÉN ERIK ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ** en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado para tal efecto, por oficio al Comité Ejecutivo Nacional del Partido, a la Comisión Política Permanente del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito federal y en los Estrados de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, para los efectos legales procedentes.

Hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, autorizando de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16, fracción IV del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatal y del Distrito Federal de Justicia Partidaria a firmar la resolución de mérito a su Presidente, Homero Díaz Rodríguez, quien es asistido por Juan Carlos Camacho García, quien actúa como Secretario General de Acuerdos encargado y da fe.

Licenciado Homero Díaz Rodríguez.
Presidente.

Juan Carlos Camacho García.
Secretario General de Acuerdos encargado.

